



☐ ☐ DEFENSOR
☐ DEL PUEBLO DE LA NACIÓN

INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Programa OCDE - Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OECD Programme - Organization for Economic Cooperation and Development

ESPAÑOL



Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos





DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

00073/17



BUENOS AIRES, 20 DIC 2017

VISTO las decisiones A/HRC/17/31, A/HRC/RES/17/4, A/RES/70/1, A/RES/70/163, A/HRC/33/L.17/Rev.1, de las Naciones Unidas, y la Res. N° 1992/54, reafirmada por la Asamblea General por Res. N° 48/134 de 1993, así como también la Declaración de Edimburgo, aprobada el 10 de octubre de 2010, en la 10° Conferencia Internacional, por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, y la A/HRC/RES/17/4, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre muchas otras;

Y CONSIDERANDO

Que esta Institución creó el 30 de diciembre de 2015 el "**Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030**", a fin de colaborar con las Naciones Unidas y con las autoridades públicas de nuestro país para lograr el cumplimiento de las 169 metas de esa Agenda, por parte del Estado Nacional.

Que, el Programa tiene como finalidad efectuar, periódicamente, un seguimiento y evaluación acerca de las políticas públicas nacionales que se llevan delante de aquí al 2030, colaborando con la elaboración de informes anuales.

Que, en ese sentido, el 25 de enero de 2017 se creó el "**Programa de Seguimiento y Evaluación del Examen Periódico Universal**", en pos de cumplir con lo que el Consejo de Derechos Humanos señala en el punto 17 de la Res. A/HRC/33/L.17/ Rev.1: "*Reconoce el importante papel que desempeñan las instituciones nacionales de derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos, incluido su mecanismo de examen periódico universal, tanto en la fase de preparación como en la de seguimiento, y los procedimientos especiales, así*

7
4
dx

como su colaboración con los órganos de tratados de derechos humanos de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General 60/251, de 15 de marzo de 2006, y 65/281, de 17 de junio de 2011, las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 5/1 y 5/2, de 18 de junio de 2007, y 19/119, de 22 de marzo de 2012, y la resolución 2005/74 de la Comisión de Derechos Humanos, de 20 de abril de 2005”.

Que, a su turno, el 28 de marzo de 2017 se creó el **“Programa GANHRI Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 para las Objetivos de Desarrollo Sostenible”**, (*Global Alliance of National Human Rights Institutions*, es decir, Alianza Global de las Instituciones de Derechos Humanos).

Que, a fin de cumplir con todos esos compromisos, nuestra INDH creó una serie de *Programas* que se nutren y vinculan mutuamente con los resultados que se van obteniendo para luego ser informados a las autoridades públicas nacionales y a los organismos internacionales.

Que el 3 de febrero de 2017 se creó el **“Programa sobre las empresas y los derechos humanos”**.

Que el 26 de junio de 2017 se creó el **“Programa de Salud y derechos humanos”**.

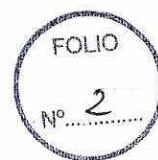
Que el 30 de junio de 2017 se creó el **“Programa sobre el Medio Ambiente y los derechos humanos”**.

Que, en virtud de lo expuesto, se estrecharon, particularmente, vínculos con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y con otras agencias de ONU.

Que así, y en ejercicio de las competencias propias de esta Defensoría, conforme las leyes vigentes, la misión impuesta por el artículo 86 de la Constitución Nacional y en virtud del mandato que se le reconoce conforme los “Principios de París” adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de ONU



00073/17



DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

por Res. Nº 1992/54 reafirmada por la Asamblea General por Res. Nº 48/134 de 1993, nuestra Institución, como INDH, participa por derecho propio en todo el sistema de promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales universalmente reconocidas en la Carta Internacional de Derechos Humanos y demás tratados y convenciones internacionales.

Que la dinámica de los *Programas* demostró que la creación de cada uno de ellos nos permitió, como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), darle un marco estratégico al seguimiento y evaluación de las políticas públicas, con resultados fructíferos para unos y otros, en beneficio de todas las personas que habitan nuestro país.

Que la Resol. A/RES/48/134 de la Asamblea General, recuerda que en la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, se reafirmó el importante papel que desempeñan las INDH, en particular en lo que respecta a su capacidad para asesorar a las autoridades y a su papel en la reparación de las violaciones a los derechos humanos. En aquella Declaración y Programa de Acción de Viena, Resol. A/CONF157/23 (1993), se afirmó: ***"100 ... las instituciones nacionales de derechos humanos, así como las organizaciones no gubernamentales, podrán presentar al Secretario General de las Naciones Unidas sus opiniones acerca de los progresos realizados en la aplicación de la presente Declaración. Se debe prestar especial atención a la evaluación de los progresos logrados para alcanzar la meta de la ratificación universal de los tratados y protocolos internacionales de derechos humanos aprobados en el marco del sistema de las Naciones Unidas"***. Argentina adoptó y ratificó la Declaración y Programa de Acción de Viena.

Que, en este contexto, se decide por la presente crear el ***"Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos"***, en función de los lineamientos que se indicarán a continuación.

Que Argentina adhirió a la Declaración sobre Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales de la OCDE en 1997, por lo que nuestro país resulta signatario de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que son parte de aquel instrumento.

Que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (LDEM) son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales que operan en países adherentes o que tienen su sede en ellos, y que si bien no son vinculantes, constituyen el único código de conducta empresarial responsable, exhaustivo y acordado multilateralmente, que los gobiernos se han comprometido a promover.

Que el 4 de mayo del año 2010 los gobiernos de los países adherentes de la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales comenzaron a negociar la actualización de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE; y como resultado de ese proceso, se acordó la incorporación de nuevas materias, ordenadas en sucesivos capítulos, que corresponden a derechos humanos, empleo y relaciones laborales, igualdad de género, educación, medio ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, competencia, fiscalidad y publicación de informaciones.

Que para el cumplimiento de sus fines, los gobiernos se comprometieron a establecer Puntos Nacionales de Contacto (PNC) con la misión de promover las Directrices y actuar como un foro de discusión para todos los asuntos relacionados con ellas, realizando, además, actividades de promoción, atendiendo consultas y contribuyendo a la resolución de las cuestiones que surjan en relación con la implementación de las Directrices en instancias específicas.

Que, en este marco, por Resolución N° 17 de fecha 25 de enero de 2013, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, estableció como funciones del Punto Nacional de Contacto *"promover la vigencia de las Directrices de la*



00073/17



DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para las Empresas Multinacionales y contribuir a la resolución de asuntos vinculados con la implementación de las mismas".

Que dicha Resolución estableció que el Punto Nacional de Contacto OCDE funcionara en el ámbito de la Dirección de Asuntos Económicos Multilaterales, dependiente de la Dirección Nacional de Negociaciones Económicas Multilaterales, de la Subsecretaría de Negociaciones Económicas Internacionales, de la Cancillería.

Que a la citada Dirección también le corresponde intervenir en el tema de la responsabilidad social empresaria, en el marco de las referidas Directrices.

Que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el punto 6 de su Resolución 17/4 del 6 de julio de 2011 (A/HRC/RES/17/4), estableció un grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, para que, entre otros asuntos: *"h) Establezca un diálogo sistemático y analice los posibles ámbitos de cooperación con los gobiernos y todos los interlocutores pertinentes, incluidos los órganos de las Naciones Unidas, los organismos especializados, los fondos y los programas, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Pacto Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial y su Corporación Financiera Internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones, así como con las empresas transnacionales y otras empresas, las instituciones nacionales de derechos humanos, los representantes de los pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones internacionales regionales y subregionales."*

Que, dada su importancia, al menos otras resoluciones de las Naciones Unidas merecen ser citadas; por ejemplo, la A/HRC/32/45, del 4 de mayo de 2016; la A/HRC/35/33, del 24 de abril de 2017; la A/HRC/35/33, del 25 de abril de

7
4
B

2017; y la A/72/162*, del 18 de julio de 2017; así como las recomendaciones elaboradas con fecha 30 de junio de 2017, por el grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas, en relación a la Agenda 2030,

Que, se insiste con lo indicado oportunamente, en cuanto a que nuestra Institución creó el **Programa sobre las empresas y los derechos humanos**, teniendo en cuenta, entre otras observaciones, el Trabajo Conjunto elaborado por el Instituto de Derechos Humanos de Dinamarca, en representación del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Comité Internacional de Coordinación (ahora GANHRI), en colaboración con la Secretaría de las Directrices de la OCDE y con contribuciones de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos.

Que, allí se indica: *"Los PNC proporcionan un foro importante para la comunicación y para tratar cuestiones relativas a las responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos. Las INDH y otras partes interesadas, incluidos los propios PNC, pueden cooperar para garantizar el acceso a recursos cuando las denuncias presentadas a los PNC alegan violaciones de los derechos humanos por empresas."*

Que, agrega: *"En octubre de 2010, las INDH adoptaron la Declaración de Edimburgo sobre Empresas y Derechos Humanos. Esta Declaración establece claramente el compromiso conjunto contraído por las INDH para fomentar una mejor comprensión y un mayor respeto de los derechos humanos en las operaciones comerciales. En particular, la Declaración alienta a las INDH a considerar asociaciones entre INDH y Redes locales del Pacto Mundial, al igual que a establecer vínculos con los gobiernos, las empresas y la sociedad civil."*

Que, por otro lado entiende que *"Los PNC se reúnen periódicamente para intercambiar experiencias y reportar al Comité de Inversión de la OCDE. Esto ofrece a los PNC una oportunidad de presentar informes anuales; debatir actividades para promover las Directrices en la agenda proactiva; participar en*



00073/17



DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

evaluaciones de aprendizaje entre pares; comparar las lecciones aprendidas sobre cuestiones específicas; fortalecer los esfuerzos de colaboración y celebrar consultas con representantes de empresas, sindicatos, ONG, organizaciones internacionales e INDH."

Que, a más de lo expuesto, y como antecedentes, es del caso poner de resalto que en el año 2012, la OCDE y el CIC (reitero, ahora GANHRI) firmaron un Memorando de Entendimiento en Ammán, Jordania, en el marco de la XI Conferencia Bienal del CIC.

Que el propósito del Memorando de Entendimiento fue establecer un programa de cooperación para promover la comprensión, la visibilidad y la utilización de las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales junto con el Mandato de los Principios de París de las INDH, en pro de un mayor respeto de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales.

Que en dicho Memorando se dispuso: "*Se incluye aquí la utilización de las sinergias entre la OCDE y los PNC, por una parte, y el CIC y las INDH, por otra, por ejemplo mediante: la referencia a los instrumentos, las funciones y el trabajo pertinentes mutuos; la participación conjunta en eventos de relación mundial; el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades entre los PNC y las INDH; los conocimientos especializados sobre derechos humanos y la diligencia debida y el diálogo continuo.*"

Que no caben dudas que los PNC y las INDH pueden tener conocimientos complementarios pertinentes para la promoción del respeto de los derechos humanos por las empresas, teniendo en cuenta que los PNC son responsables de las Directrices de la OCDE y la aplicación de las disposiciones relativas a los derechos humanos.

Que el citado Memorando da cuenta de una serie de acciones positivas que las INDH y los PNC deberían llevar adelante en beneficio del cumplimiento de las Pautas de la OCDE, a saber:

a. *“Las INDH del Estado de origen pueden contribuir a las acciones de los PNC para promover el aprendizaje en el ámbito nacional entre las empresas y otras partes interesadas sobre las Directrices de la OCDE. Algunas INDH son expertas en temas específicos de empresas y derechos humanos; un ejemplo es la evaluación de las repercusiones sobre los derechos humanos, la eliminación de la discriminación en el lugar de trabajo, la contratación pública socialmente responsable y los derechos laborales. Mantener un diálogo periódico entre los PNC y las INDH permite promover el intercambio de información pertinente para definir la diligencia debida en contextos determinados. Los PNC participan actualmente de forma activa en los proyectos de “agenda proactiva” del Comité de Inversión de la OCDE sobre diligencia debida en el sector financiero y la participación de las partes interesadas en la industria extractiva.”.*

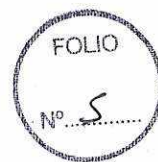
b. *“Las INDH pueden tener competencias jurídicas en sus países para tramitar las denuncias, actuar como instancia de mediación y conciliación o para investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos, según las leyes en virtud de las cuales hayan sido creadas. Los PNC y las INDH deben conocer sus mutuos mandatos sobre atención de denuncias y examinar la coordinación de sus actividades.”.*

c. *“Las INDH y los PNC pueden, por lo tanto, colaborar entre sí para elaborar plataformas que sirvan para proporcionar información, publicaciones y herramientas sobre cuestiones de empresas y derechos humanos para compañías y otras partes interesadas. Asimismo, pueden organizar conjuntamente eventos públicos para estimular la sensibilización y el compromiso entre las empresas y las comunidades en materia de sostenibilidad.”.*

Que resulta de sumo interés tener en cuenta que el Instituto Danés de Derechos Humanos (IDDH) es la institución nacional de derechos humanos de Dinamarca, y en el año 2011, durante la comparecencia de Dinamarca en el Primer Ciclo de la Revisión Periódica Universal (EPU) ante el Consejo de



00073/17



DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

Derechos Humanos de la ONU, recomendó que su país revisara los acuerdos relativos a los PNC y *"se asegurara de que el PNC danés cumpliera todos los criterios principales de los PNC conforme a las Directrices de la OCDE, y todos los criterios de los mecanismos no judiciales de quejas conforme al Anteproyecto de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU"*.

Que, a su turno, la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública, solicita a los países miembros y no miembros que posibiliten una rendición de cuentas eficaz; y en su punto 12, expresamente indica que se debe reforzar el papel de la supervisión y control externos en el sistema de integridad del sector público, en concreto: *"a) facilitando el aprendizaje organizacional y garantizando la rendición de cuentas de las entidades del sector público proporcionando respuestas adecuadas (incluso aplicando medidas correctivas, cuando proceda) a las sanciones, decisiones y asesoramiento formal de los órganos de supervisión (tales como las entidades superiores de auditoría, el defensor del pueblo o las comisiones de información), los organismos de reglamentación y aplicación y los tribunales administrativos"*.

Que, no resulta ocioso recordar que nuestro país presentó un *Plan de Acción Argentina & OCDE 2016-2017*, solicitando, formalmente, su ingreso a la organización como miembro pleno o socio estratégico.

Que dicho Plan fue estructurado alrededor de 3 categorías principales: *"aumentar la participación en los Comités de la OCDE; adherir a instrumentos claves de la organización; llevar a cabo estudios de políticas públicas"*.

Que, en el presente, la Argentina participa en distintos órganos de la OCDE, con diferente grado de institucionalidad, tales como: el Comité de Asuntos Fiscales, el Comité de Comercio, el Comité de Agricultura, el Comité de Pesca, el Comité de Políticas en Ciencia y Tecnología, el Centro de Desarrollo, el Grupo de Trabajo sobre Soborno, el Comité de Inversiones, entre otros.

Que en la actualidad Argentina espera la invitación formal de la OCDE, honrando los compromisos asumidos y los comprometidos para los próximos años, con la finalidad de lograr la aprobación definitiva de su ingreso por parte de los 35 países que actualmente son miembros de la OCDE.

Que recientemente el Poder Ejecutivo Nacional presentó el denominado Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), y en su Eje N° 5 "Cultura Cívica y Compromiso con los Derechos Humanos", más precisamente en su punto 5.6. "Derechos Humanos y Empresas", señala textualmente que le corresponderá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos *"Contribuir al diseño e implementación ... de guías y protocolos de acción en el marco de instrumentos internacionales como los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos y las Directrices de la OCDE, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad."*, siendo su meta la elaboración y realización de cinco (5) protocolos y guías de actuación.

Que, así pues, el **"Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos"**, tendrá por finalidad: **a.** Establecer un programa de cooperación para promover mayor entendimiento, visibilidad y uso de las Pautas de la OCDE entre el Punto Nacional de Contacto Argentino y el Mandato de los Principios de París que rige a nuestra INDH, en pos de mayor respeto a los derechos humanos; **b.** Promover y proteger los derechos humanos estrechamente vinculados con las Pautas de la OCDE, mediante instrumentos y trabajos en iniciativas, comunicaciones y publicaciones relevantes; y **c.** Cooperar con otras INDHs en la coordinación de buenas prácticas de trabajo, intercambiando experiencias, información, elaborando propuestas, y apoyando los procesos de implementación de las Pautas de la OCDE.

Que la dirección y supervisión general del *Programa* quedará a cargo del Subsecretario General; y, el enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación con las distintas áreas temáticas de la Institución queda a cargo de la Asesoría



00073/17



DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

Legal y Técnica, nutriendo a este Programa con la información que recoja de los otros Programas que se han señalada párrafos arriba.

Que dicho *Programa* será llevado adelante en el marco de la actuación N° 13.330/17, y allí se irán agregando la totalidad de los antecedentes necesarios para la oportunidad pertinente, y cuyos resultados serán informados a las autoridades públicas nacionales y a los organismos internacionales que correspondan.

Que el Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de desarrollar las actividades de difusión y promoción del "*Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos*".

Que la Asesoría Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por artículo 6° inciso j) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, la autorización conferida por los Señores Presidentes de los bloques mayoritarios del H. Senado de la Nación, como de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, ratificada por su Resolución N° 0001/2014 del 23 de abril de 2014, y la nota de fecha 25 de agosto de 2015 del Sr. Presidente de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo que ratifica las mismas facultades y atribuciones otorgadas al Secretario General en la persona del Subsecretario para el supuesto de licencia o ausencia de aquél.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO GENERAL DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Créase el "*Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos*".

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la siguiente metodología de trabajo en el marco del referido Programa:

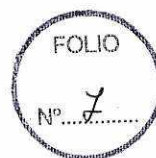
1. La dirección y supervisión general del *Programa* queda a cargo del Subsecretario General.

2. Que el *Programa* tiene por finalidad: **a.** Establecer un programa de cooperación para promover mayor entendimiento, visibilidad y uso de las Pautas de la OCDE entre el Punto Nacional de Contacto Argentino y el Mandato de los Principios de París que rige a nuestra INDH, en pos de mayor respeto a los derechos humanos; **b.** Promover y proteger los derechos humanos estrechamente vinculados con las Pautas de la OCDE, mediante instrumentos y trabajos en iniciativas, comunicaciones y publicaciones relevantes; y **c.** Cooperar con otras INDHs en la coordinación de buenas prácticas de trabajo, intercambiando experiencias, información, elaborando propuestas, y apoyando los procesos de implementación de las Pautas de la OCDE.

3. El enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación con las distintas áreas temáticas de la Institución, y la relación con las INDHs queda a cargo de la Asesoría Legal y Técnica, con la activa participación de la Oficina de Jurisprudencia y Documentación, nutriendo a este *Programa*, entre otras, con la información que recoja de los otros *Programas* que se han referido párrafos arriba.

4. Que dicho *Programa* será llevado adelante en el marco de la actuación N° 13.330/17, y allí se irán agregando la totalidad de los antecedentes necesarios para la oportunidad pertinente, y cuyos resultados serán informados a las autoridades públicas nacionales y a los organismos internacionales que correspondan.

5. Que el Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de desarrollar las actividades de difusión y promoción del "*Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos*".



DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

ARTÍCULO 3º.- Exhortar a todas las autoridades públicas de nuestro país, nacionales, provinciales y municipales, a colaborar con la Defensoría del Pueblo de la Nación, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, con los requerimiento que les sean formulados en el marco del *"Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos"*, en función de los principios que reconocen la Alianza para el Gobierno Abierto y las prácticas de buena gobernanza.

ARTÍCULO 4º.- Invitar a la sociedad civil en su conjunto, a participar, cooperar y colaborar de manera directa con el desarrollo del *"Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos"*.

ARTÍCULO 5º.- Poner el contenido de esta resolución en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, del Ministerio de Hacienda de la Nación, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en este caso a través de sus oficinas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del GANHRI, de la CEPAL, y de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN DPA N° 00073717

Dr. JUAN JOSÉ BÜCKEL
SUBSECRETARIO GENERAL
DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION

Unidad de Monitoreo en la Coherencia de las Políticas Públicas a favor del Desarrollo Sostenible





DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

00002/18



BUENOS AIRES, 15 FEB 2018

VISTO las decisiones A/HRC/17/31, A/HRC/RES/17/4, A/RES/70/1, A/RES/70/163, A/HRC/33/L.17/Rev.1, de las Naciones Unidas, y la Res. Nº 1992/54, reafirmada por la Asamblea General por Res. Nº 48/134 de 1993, así como también la Declaración de Edimburgo, aprobada el 10 de octubre de 2010, en la 10º Conferencia Internacional, por el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, y la A/HRC/RES/17/4, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre muchas otras;

Y CONSIDERANDO

Que esta Institución creó el 30 de diciembre de 2015 el "**Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030**", a fin de colaborar con las Naciones Unidas y con las autoridades públicas de nuestro país para lograr el cumplimiento de las 169 metas de esa Agenda, por parte del Estado Nacional.

Que, el Programa tiene como finalidad efectuar, periódicamente, un seguimiento y evaluación acerca de las políticas públicas nacionales que se llevan delante de aquí al 2030, colaborando con la elaboración de informes anuales.

Que, es importante poner de resalto que la Defensoría del Pueblo de la Nación, en el mes de julio de 2017, participó, entre los días 10 a 19, del *Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas*, en Nueva York, y estuvo presente cuando Argentina, representada por la Dra. Gabriela Agosto, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, presentó su informe voluntario de avance, en el marco del proceso de revisión y examen sobre la

Handwritten signature and initials.

implementación y aplicación de la Agenda 2030, conforme surge de la RES N° A/70/L.60.

Que, nuestra INDH también presentó su Informe de avance del *"Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030"*, ante el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el Sistema de Naciones Unidas, la Misión Permanente de la República Argentina en Naciones Unidas, representada por el Embajador Martín García Moritán, y el PNUD.

Que aquel Informe, correspondiente a enero/junio 2017, fue actualizado a fin de año por el período julio/diciembre 2017, y se entregó a esas mismas autoridades, así como también a otros organismos nacionales e internacionales.

Que en el primer Informe se analizó el grado de avance en las políticas públicas alcanzadas por las siguientes 23 metas: **1.2., 1.3., 2.4., 3.7., 4.2., 5.2., 5.c., 6.1., 6.3., 7.1., 7.2., 8.6., 9.c., 10.7., 11.5., 12.5., 13.2., 14.1., 14.2., 15.2., 16.9., 16.10., y 17.17;** y en el segundo Informe se indagó con relación a 27 metas, la mayoría de ellas distintas a las anteriores: **1.2., 1.3., 1.4., 2.2., 3.2., 4.1., 4.5., 5.c., 6.1., 6.3., 7.1., 7.2., 8.7., 8.8., 9.c., 10.7., 11.1., 11.2., 12.5., 13.2., 14.1., 14.2., 15.1., 15.3., 16.2., 16.10., 17.17.**

Que en ambos Informes se señalan aciertos y falencias, y se elaboran propuestas y recomendaciones finales para que, en su caso, sean tomadas por el Estado Nacional como contribución a un mejor y más efectivo modo de cumplir con la Agenda 2030.

Que, es del caso poner de resalto que ambos Informes serán entregados a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), en la reunión anual 2018 que se realizará del 21 al 23 de febrero de 2018 en Ginebra, Suiza, en la Sala XIX, en el Palais des Nations (ONU).

Que en orden al GANHRI en su publicación de junio de 2017, titulada *"National Human Rights Institutions engaging with the Sustainable Development*



DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

00002/18



Goals(SDGs)", en su página 19, señala lo que sigue: "Un líder en el monitoreo de los derechos humanos de los ODS es la INDH argentina, Defensor del Pueblo de la Nación, que ha desempeñado un papel crucial en el programa nacional de Argentina para el monitoreo y la evaluación de los ODS."

Que, agrega: "En el mes de enero de 2016, la Institución Nacional de Derechos Humanos de la Argentina, el Defensor del Pueblo de la Nación (estatus A), puso en marcha un programa integral de seguimiento y evaluación de los ODS. El programa fue articulado de modo tal que cada una de las áreas temáticas de la Defensoría efectuaría investigaciones de acuerdo con sus conocimientos técnicos. Para el mes de junio de 2017, la Defensoría ya había abierto cincuenta y siete investigaciones, vinculadas todas ellas, claramente, a los ODS. Los resultados se enviarán, anualmente, a las autoridades nacionales pertinentes y al Sistema de las Naciones Unidas; en especial, al Consejo de Derechos Humanos. Asimismo, la Defensoría ha mapeado las recomendaciones del Examen Periódico Universal y los ODS ... La práctica de la Defensoría de Argentina no sólo es un ejemplo de INDH que, en el ejercicio de su mandato, supervisa los aspectos de los ODS relacionados con los derechos humanos; sino que, además, es un excelente ejemplo del papel excepcional de tender puentes que poseen las INDHs: la Defensoría colabora con la sociedad civil, las universidades, las empresas y los organismos gubernamentales en un esfuerzo por promover y proteger los derechos humanos en el marco de los ODS con el fin de alcanzar la efectiva implementación del Programa de Seguimiento y Evaluación de los ODS. La Defensoría ha colaborado, concretamente, con el PNUD Argentina en la organización de cuatro reuniones con actores de la sociedad civil en diferentes provincias de la Argentina. Las reuniones se centraron en el compromiso con la Agenda 2030 y el EPU. Como bien lo destaca la propia Defensoría, la colaboración entre las diferentes partes interesadas constituye un aporte significativo al Objetivo 17.17 de los ODS que alienta la promoción de alianzas

7
wff
L

efectivas entre los sectores público, público-privado y la sociedad civil. La Defensoría, además de la tarea que realiza a nivel nacional relacionada con los ODS, es miembro del Grupo de Trabajo de GANHRI sobre ODS.”

Que, a su turno, el 28 de marzo de 2017 se creó el **“Programa GANHRI Grupo de Trabajo de la Agenda 2030 para las Objetivos de Desarrollo Sostenible”**, (*Global Alliance of National Human Rights Institutions*, es decir, Alianza Global de las Instituciones de Derechos Humanos), cuya finalidad es la de coordinar buenas prácticas de trabajo con las INDHs de la región americana, intercambiar experiencias, elaborar propuestas, y apoyar el desarrollo para el progreso de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, en función del Objetivo 16; e intercambiar información, proyectos, documentos, declaraciones, publicaciones, etcétera, con los otros miembros del Grupo de Trabajo GANHRI, en función de la Agenda 2030, con miras a fortalecer la participación de las INDHs ante el Sistema de las Naciones Unidas.

Que el 3 de febrero de 2017 se creó el **“Programa sobre las empresas y los derechos humanos”**, a fin de identificar, intercambiar, promover y evaluar las buenas prácticas sobre la aplicación de los Principios Rectores, y, en su caso formular recomendaciones o exhortaciones al Estado Nacional y a las empresas nacionales y transnacionales.

Que el 20 de diciembre de 2017 se creó el **“Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”**, con la finalidad de cooperar para promover mayor entendimiento, visibilidad y uso de las Pautas de la OCDE entre el Punto Nacional de Contacto Argentino y el Mandato de los Principios de París que rige a nuestra INDH, en pos de mayor respeto a los derechos humanos; **b.** Promover y proteger los derechos humanos estrechamente vinculados con las Pautas de la OCDE; y **c.** Cooperar con otras INDHs en la coordinación de buenas prácticas de trabajo, intercambiando experiencias,



DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

00002/18



información, elaborando propuestas, y apoyando los procesos de implementación de las Pautas de la OCDE.

Que, cabe recordar que Argentina adhirió a la Declaración sobre Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales de la OCDE en 1997, por lo que nuestro país resulta signatario de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que son parte de aquel instrumento.

Que las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (LDEM) son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a las empresas multinacionales que operan en países adherentes o que tienen su sede en ellos, y que si bien no son vinculantes, constituyen el único código de conducta empresarial responsable, exhaustivo y acordado multilateralmente, que los gobiernos se han comprometido a promover.

Que el 4 de mayo del año 2010 los gobiernos de los países adherentes de la Declaración sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales comenzaron a negociar la actualización de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE; y como resultado de ese proceso, se acordó la incorporación de nuevas materias, ordenadas en sucesivos capítulos, que corresponden a derechos humanos, empleo y relaciones laborales, igualdad de género, educación, medio ambiente, lucha contra la corrupción, intereses de los consumidores, ciencia y tecnología, competencia, fiscalidad y publicación de informaciones.

Que para el cumplimiento de sus fines, los gobiernos se comprometieron a establecer Puntos Nacionales de Contacto (PNC) con la misión de promover las Directrices y actuar como un foro de discusión para todos los asuntos relacionados con ellas, realizando, además, actividades de promoción, atendiendo consultas y contribuyendo a la resolución de las cuestiones que surjan en relación con la implementación de las Directrices en instancias específicas.

Handwritten signature and initials.

Que, en este marco, por Resolución N° 17 de fecha 25 de enero de 2013, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, estableció como funciones del Punto Nacional de Contacto *"promover la vigencia de las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para las Empresas Multinacionales y contribuir a la resolución de asuntos vinculados con la implementación de las mismas"*.

Que, a más de lo expuesto, y como antecedente, es del caso poner de resalto que en el año 2012, la OCDE y el CIC (reitero, ahora GANHRI) firmaron un Memorando de Entendimiento en Ammán, Jordania, en el marco de la XI Conferencia Bienal del CIC.

Que el propósito del Memorando de Entendimiento fue establecer un programa de cooperación para promover la comprensión, la visibilidad y la utilización de las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales junto con el Mandato de los Principios de París de las INDH, en pro de un mayor respeto de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales.

Que en dicho Memorando se dispuso: *"Se incluye aquí la utilización de las sinergias entre la OCDE y los PNC, por una parte, y el CIC y las INDH, por otra, por ejemplo mediante: la referencia a los instrumentos, las funciones y el trabajo pertinentes mutuos; la participación conjunta en eventos de relación mundial; el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades entre los PNC y las INDH; los conocimientos especializados sobre derechos humanos y la diligencia debida y el diálogo continuo."*

Que, a su turno, la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Integridad Pública, solicita a los países miembros y no miembros que posibiliten una rendición de cuentas eficaz; y en su punto 12, expresamente indica que se debe reforzar el papel de la supervisión y control externos en el sistema de integridad del sector público, en concreto: *"a) facilitando el aprendizaje organizacional y garantizando la rendición de cuentas de las entidades del sector"*



DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

00002/18



público proporcionando respuestas adecuadas (incluso aplicando medidas correctivas, cuando proceda) a las sanciones, decisiones y asesoramiento formal de los órganos de supervisión (tales como las entidades superiores de auditoría, el defensor del pueblo o las comisiones de información), los organismos de reglamentación y aplicación y los tribunales administrativos”.

Que, no resulta ocioso recordar que nuestro país presentó un *Plan de Acción Argentina & OCDE 2016-2017*, solicitando, formalmente, su ingreso a la organización como miembro pleno o socio estratégico.

Que dicho Plan fue estructurado alrededor de 3 categorías principales: *“aumentar la participación en los Comités de la OCDE; adherir a instrumentos claves de la organización; llevar a cabo estudios de políticas públicas”.*

Que, en el presente, la Argentina participa en distintos órganos de la OCDE, con diferente grado de institucionalidad, tales como: el Comité de Asuntos Fiscales, el Comité de Comercio, el Comité de Agricultura, el Comité de Pesca, el Comité de Políticas en Ciencia y Tecnología, el Centro de Desarrollo, el Grupo de Trabajo sobre Soborno, el Comité de Inversiones, entre otros.

Que en la actualidad Argentina espera la invitación formal de la OCDE, con la finalidad de lograr la aprobación definitiva de su ingreso por parte de los 35 países que actualmente son miembros plenos.

Que recientemente el Poder Ejecutivo Nacional presentó el denominado Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos (2017-2020), y en su Eje Nº 5 “Cultura Cívica y Compromiso con los Derechos Humanos”, más precisamente en su punto 5.6. “Derechos Humanos y Empresas”, señala textualmente que le corresponderá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos *“Contribuir al diseño e implementación ... de guías y protocolos de acción en el marco de instrumentos internacionales como los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos y las Directrices de la OCDE, con especial atención a*

7
ufp

R

grupos en situación de vulnerabilidad.”, siendo su meta la elaboración y realización de cinco (5) protocolos y guías de actuación.

Que, no resulta ocioso mencionar que en ejercicio de las competencias propias de esta Defensoría, conforme las leyes vigentes, la misión impuesta por el artículo 86 de la Constitución Nacional y en virtud del mandato que se le reconoce conforme los “Principios de París” adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de ONU por Res. N° 1992/54 reafirmada por la Asamblea General por Res. N° 48/134 de 1993, nuestra Institución, como INDH, participa por derecho propio en todo el sistema de promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales universalmente reconocidas en la Carta Internacional de Derechos Humanos y demás tratados y convenciones internacionales.

Que, a fin de cumplir con todos esos compromisos, nuestra INDH creó, entre otros, como se vio párrafos arriba, el *Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030*”, y el *Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos*, y la puesta en marcha de ambos y de sus prácticas permitieron establecer un marco estratégico al seguimiento y evaluación de las políticas públicas, en beneficio de todas las personas que habitan nuestro país.

Que, dentro de ese contexto, debe incluirse la asociación “*Policy Coherence for Sustainable Development*” (PCSD), en castellano: Coherencia de las Políticas para el Desarrollo Sostenible; que integran los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, el sector privado, grupos de expertos y otras partes interesadas comprometidas y que trabajan para mejorar la coherencia en materia de políticas para el desarrollo sostenible, en función de la Agenda 2030, Objetivo 17, meta 17.14: “*Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.*” (ONU, A/RES/70/1).

Que la PCSD que depende de la OCDE, está trabajando para fortalecer las capacidades de los gobiernos y las partes interesadas claves en la



00002/18

**DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION**
REPUBLICA ARGENTINA

formulación, implementación y monitoreo de la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible; así como también en la identificación de buenas prácticas institucionales para mejorar las estrategias nacionales de desarrollo sostenible.

Que, además, la PCSD, como bien lo indica en el documento titulado "PCSD PARTNERSHIP" (ver página web: <http://bit.ly/2EEawtc>) se compromete a organizar talleres para fomentar el diálogo sobre la coherencia de las políticas para en la implementación de los ODS; desarrollar un monitor de coherencia en línea para proporcionar opciones y apoyar esfuerzos para informar sobre el progreso en ODS; realizar estudios de casos nacionales para identificar buenas prácticas y facilitar el intercambio de experiencias; establecer una metodología para monitorear el Objetivo 17.14 de la Agenda 2030; efectuar orientaciones prácticas para apoyar a cualquier gobierno interesado en adaptar su mecanismos institucionales, procesos de formulación de políticas y prácticas para implementar los ODS en una manera coherente; y, finalmente, entre otros, también se compromete a desarrollar informes de políticas sobre cuestiones específicas de coherencia en la implementación de los ODS para contribuir al diálogo sobre estrategias; y publicar informes anuales con un enfoque temático, dirigidos a las partes interesadas, los socios y el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas.

Que, por último debe ponerse de resalto que la PCSD invita a sus miembros a mejorar la coherencia de las políticas públicas para el desarrollo sostenible; a que indiquen las organizaciones interesadas si se encuentran trabajando en la coherencia de las políticas en el contexto de la implementación de los ODS, así como, en su caso, a informar el compromiso asumido, las prácticas institucionales llevadas adelante, su estado de avance y progresos, e invitando a su publicación a través de la plataforma en línea de Partnership PCSD.

Que, como se advierte fácilmente, el enfoque que brinda la PCSD, reitero, que depende de la OCDE, en cuanto a la coherencia de las políticas

públicas y su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, en función del Objetivo 17, meta 17.14.

Que, en consecuencia y a fin de vincular directa y estrechamente el *Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030*", y el *Programa OCDE - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos*, será de buena práctica crear en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación la *Unidad Funcional de Monitoreo en la Coherencia de las Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible*, cuya dirección y supervisión general quedará a cargo del Subsecretario General, y el enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación con las distintas áreas temáticas de la Institución, queda a cargo de la Asesoría Legal y Técnica.

Que la *Unidad Funcional* tiene por finalidad: **a.** Desarrollar mejores prácticas en el marco de los *Programas* creados por la Defensoría del Pueblo de la Nación, para el monitoreo de la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible; así como también en la identificación de buenas prácticas institucionales para mejorar las estrategias nacionales de desarrollo sostenible; **b.** Cooperar con las áreas temáticas de nuestra Institución en la formulación de los Informes sobre el progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible bajo una perspectiva coherente de las políticas públicas, y que serán presentados anualmente ante las autoridades de nuestro país, el Sistema de Naciones Unidas, y otras organizaciones nacionales e internacionales; **c.** Participar activamente en la Plataforma colaborativa PCSD difundiendo el trabajo realizado, compartiendo buenas prácticas e intercambio de conocimientos.

Que el Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de difusión y promoción de las actividades que desarrolle la *Unidad Funcional*, así como la de divulgar sus resultados.

Que la Asesoría Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete.



DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION
REPUBLICA ARGENTINA

00002/18



Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por artículo 6° inciso j) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, la autorización conferida por los Señores Presidentes de los bloques mayoritarios del H. Senado de la Nación, como de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, ratificada por su Resolución Nº 0001/2014 del 23 de abril de 2014, y la nota de fecha 25 de agosto de 2015 del Sr. Presidente de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo que ratifica las mismas facultades y atribuciones otorgadas al Secretario General en la persona del Subsecretario para el supuesto de licencia o ausencia de aquél.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO GENERAL DEL
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Créase la *Unidad Funcional de Monitoreo en la Coherencia de las Políticas Públicas a favor del Desarrollo Sostenible*.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar la siguiente metodología de trabajo en el marco de la referido Unidad:

1. La dirección y supervisión general de la *Unidad Funcional* queda a cargo del Subsecretario General, y el enlace, en cuanto al seguimiento y evaluación con las distintas áreas temáticas de la Institución, queda a cargo de la Asesoría Legal y Técnica.

2. Que la *Unidad Funcional* tiene por finalidad: **a.** Desarrollar mejores prácticas en el marco de los *Programas* creados por la Defensoría del Pueblo de la Nación, para el monitoreo en la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible; así como también en la identificación de buenas prácticas institucionales para mejorar las estrategias nacionales de desarrollo sostenible; **b.** Cooperar con las áreas temáticas de nuestra Institución en la formulación de los

[Handwritten signature]

Informes sobre el progreso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible bajo una perspectiva en la coherencia de las políticas públicas, y que serán presentados anualmente ante las autoridades de nuestro país, el Sistema de Naciones Unidas, y otras organizaciones nacionales e internacionales; c. Participar activamente en la Plataforma colaborativa PCSD difundiendo el trabajo realizado, compartiendo buenas prácticas e intercambio de conocimientos.

3. Que el Área Comunicación tendrá a su cargo la tarea de difusión y promoción de las actividades que desarrolle la *Unidad Funcional*, así como la de divulgar sus resultados.

ARTÍCULO 3º.- Poner el contenido de esta resolución en conocimiento de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, del Ministerio de Hacienda de la Nación, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la CEPAL (en estos dos casos a través de sus oficinas ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y del GANHRI.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN DPA N° 00002/18



Dr. JUAN JOSÉ BÖCKEL
SURSECRETARIO GENERAL
DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACIÓN

ENGLISH



OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development



Buenos Aires, December 20, 2017

HAVING REGARD TO the decisions A/HRX/17/31, A/HRC/RES/17/4, A/HRC/RES/33/L.17Rev. 1, of the United Nations, and Res. No. 1992754, reaffirmed by the General Assembly by Res. No. 48/134 of 1993. as well as The Edinburgh Declaration, approved on October 10, 2010, in the 10th International Conference, by the International Coordinating Committee of the National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, and the A/HRC/RES/17/4, of the UN Human Rights Council, among many others;

WHEREAS,

That this Institution created on December 30, 2015 the "Monitoring and Evaluation Program of the Sustainable Development Goals. 2030 Agenda", in order to collaborate with the United Nations and with the public authorities of our country to achieve compliance with the 169 goals of that Agenda, by the National State.

That, the purpose of the Program is to carry out, periodically, a follow-up and evaluation of the national public policies that are carried out before 2030, collaborating with the preparation of annual reports.

That, in this sense, on January 25, 2017, the **"Monitoring and Evaluation Program of the Universal Periodic Review"** was created to fulfill what the Human Rights Council points out in point 17 of Res. A/HRC/33/L.17/ Rev.1: *"Recognizes the important role played by national human rights institutions in the Human Rights Council, including its universal periodic review mechanism, both in the preparation phase and in the follow-up phase, and special procedures, as well as their collaboration with human rights treaty bodies in accordance with General Assembly resolutions 60/251, of March 15, 2006, and 65/281, of June 17, 2011 , resolutions of the Human Rights Council 5/1 and 5/2, of June 18, 2007, and 19/119, of March 22, 2012, and resolution 2005/74 of the Human Rights Commission, of 20 April 2005"*.

That, in turn, on March 28, 2017, the "**GANHRI Working Group on the Agenda 2030 for the Sustainable Development Goals**" (Global Alliance of National Human Rights Institutions, that is, the Global Alliance of Institutions of Human Rights) was created.

That, in order to comply with all these commitments, our NHRI created a series of Programs that nourish and link each other with the results that are obtained and then be informed to national public authorities and international organizations.

That on February 3, 2017, the "**Program on Business and Human Rights**" was created.

That on June 26, 2017, the "**Health and Human Rights Program**" was created.

That on June 30, 2017, the "**Environment and Human Rights Program**" was created.

That, in light of the above, links were particularly strengthened with the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and with the United Nations Development Program (UNDP), and with other UN agencies.

That this way, and in exercise of the own competences of this Ombudsman, according to the effective laws, the mission imposed by the article 86 of the National Constitution and by virtue of the mandate that is recognized him according to the "Principles of Paris" adopted by the Commission of Human Rights by Res. No. 1992/54 reaffirmed by the General Assembly by Res. No. 48/134 of 1993, our Institution, as NHRI, participates in its own right throughout the system of promotion and protection of rights and freedoms fundamental universally recognized in the International Bill of Human Rights and other international treaties and conventions.

That the dynamics of the Programs showed that the creation of each one of them allowed us, as a National Institution of Human Rights (NHRI), to give a strategic framework to follow-up and evaluation of public policies, with fruitful results for both, in benefit of all the people that inhabit our country.

That the Resol. A/RES/48/134 of the General Assembly, recalls that the Vienna Declaration and Program of Action, adopted at the World Conference on Human Rights, reaffirmed the important role of NHRIs, in particular with regard to its

ability to advise the authorities and their role in repairing human rights violations. In that Vienna Declaration and Program of Action, Resol. A/CONF157/23 (1993), it was stated: "100 ... **National human rights institutions, as well as non-governmental organizations, may submit to the Secretary-General of the United Nations** their views on the progress made in the implementation of the present Declaration. Special attention should be given to the evaluation of the progress made in achieving the goal of universal ratification of international human rights treaties and protocols adopted within the framework of the United Nations system." Argentina adopted and ratified the Vienna Declaration and Program of Action.

That, in this context, it is decided to create the "**OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development**", based on the guidelines indicated below.

That Argentina adhered to the Declaration on International Investment and Multinational Enterprises of the OECD in 1997, which is why our country is a signatory to the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, which are part of that instrument.

That the OECD Guidelines for Multinational Enterprises (LDEM) are recommendations addressed by governments to multinational companies that operate in acceding countries or that have their headquarters in them, and that although they are not binding, constitute the only code of conduct responsible, comprehensive and multilaterally agreed, that governments have committed to promote.

That on May 4, 2010, the governments of the acceding countries of the Declaration on International Investment and Multinational Enterprises began to negotiate the updating of the Guidelines for Multinational Enterprises of the OECD; and as a result of this process, it was agreed to incorporate new subjects, ordered in successive chapters, which correspond to human rights, employment and labor relations, gender equality, education, environment, fight against corruption, consumer interests, science and technology, competition, taxation and publication of information.

That for the fulfillment of its objectives, the governments committed to establish National Contact Points (NCP) with the mission of promoting the Guidelines and acting as a discussion forum for all matters related to them, also carrying out promotional activities, attending consultations and contributing to the resolution of issues that arise in relation to the implementation of the Guidelines in specific instances.

That, in this framework, by Resolution No. 17 dated January 25, 2013, the Ministry of Foreign Affairs and Worship established as functions of the National Contact Point *"to promote the validity of the Organization's Guidelines for Cooperation and Economic Development (OECD) for Multinational Companies and contribute to the resolution of matters related to their implementation."*

That the aforementioned Resolution established that the OECD National Contact Point functioned within the scope of the Directorate of Multilateral Economic Affairs, under the National Directorate of Multilateral Economic Negotiations, of the Undersecretariat of International Economic Negotiations, of the Foreign Ministry.

That the aforementioned Directorate is also responsible for intervening in the issue of corporate social responsibility, within the framework of the aforementioned Guidelines.

That the Human Rights Council of the UN in point 6 of its Resolution 17/4 of July 6, 2011 (A/HRC/RES/17/4), established a working group on the issue of human rights and transnational corporations and other companies, so that, inter alia: *"(h) Establish a systematic dialogue and analyze possible areas of cooperation with governments and all relevant stakeholders, including United Nations bodies, specialized agencies, funds and programs, such as the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Global Compact, the International Labor Organization, the World Bank and its International Finance Corporation, the United Nations Development Program and the United Nations Development Program. International Organization for Migration, as well as with transnational corporations and other companies, national human rights institutions, representatives of indigenous peoples, organizations of civil society and other regional and subregional organizations.. "*

That, given their importance, at least other resolutions of the United Nations deserve to be cited; for example, A/HRC/32/45, of May 4, 2016; A/HRC/35/33, of April 24, 2017; A/HRC/35/33, of April 25, 2017; and A/72/162 *, of July 18, 2017; as well as the recommendations made on June 30, 2017, by the working group on the issue of human rights and business, in relation to the 2030 Agenda.

That, it is insisted with the indicated thing opportunely, as far as our Institution created the Program on the companies and the human rights, taking into account, among other observations, the Joint Work elaborated by the Institute of Human Rights of Denmark, in representation of the Human Rights Working Group of the International Coordinating Committee (now GANHRI), in collaboration with the Secretariat of the OECD Guidelines and with contributions from the Canadian Human Rights Commission.

That, there is indicated: *"The PNC provide an important forum for communication and to address issues related to the responsibilities of companies in the field of human rights. NHRIs and other interested parties, including the NCPs themselves, can cooperate to ensure access to remedies when complaints filed with NCPs allege violations of human rights by companies. "*

That, he adds: *"In October 2010, NHRIs adopted the Edinburgh Declaration on Business and Human Rights. This Declaration clearly establishes the joint commitment made by the NHRIs to promote a better understanding and greater respect for human rights in commercial operations. In particular, the Declaration encourages NHRIs to consider partnerships between NHRIs and local networks of the Global Compact, as well as to establish links with governments, businesses and civil society. "*

That, on the other hand, he understands that "NCPs meet periodically to exchange experiences and report to the OECD Investment Committee. This offers NCPs an opportunity to present annual reports; discuss activities to promote the Guidelines in the proactive agenda; participate in peer learning assessments; compare lessons learned on specific issues; strengthen collaborative efforts and hold consultations with representatives of companies, unions, NGOs, international organizations and INDH. "

That, besides the foregoing, and as background, it is of the case to highlight that in 2012, the OECD and the CIC (reiterated, now GANHRI) signed a Memorandum of Understanding in Amman, Jordan, within the framework of the XI Biennial Conference of the CIC.

That the purpose of the Memorandum of Understanding was to establish a cooperation program to promote understanding, visibility and use of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises along with the Mandate of the Paris Principles of NHRIs, in favor of a greater respect for human rights in the field of business activities.

That the Memorandum provided: *"This includes the use of synergies between the OECD and the NCPs, on the one hand, and the CIC and the NHRIs, on the other, for example, through: reference to instruments, functions and the relevant work mutual; joint participation in events of global relationship; the exchange of experiences and capacity building between NCPs and NHRIs; specialized knowledge on human rights and due diligence and continuous dialogue."*

That there is no doubt that NCPs and NHRIs can have complementary knowledge relevant to the promotion of respect for human rights by companies, taking into account that NCPs are responsible for the OECD Guidelines and the application of provisions related to human rights.

That the aforementioned Memorandum gives an account of a series of positive actions that NHRIs and NCPs should take forward in order to comply with the OECD Guidelines, namely:

a. *"NHRIs from the State of origin can contribute to the actions of the NCPs to promote national learning among companies and other interested parties on the OECD Guidelines. Some NHRIs are experts in specific business and human rights issues; an example is the assessment of the impact on human rights, the elimination of discrimination in the workplace, socially responsible public procurement and labor rights. Maintaining a regular dialogue between NCPs and NHRIs can promote the exchange of relevant information to define due diligence in specific contexts. The NCPs are currently actively involved in the "proactive agenda" projects of the OECD*

Investment Committee on due diligence in the financial sector and the participation of stakeholders in the extractive industry."

b. *"NHRIs may have legal powers in their countries to process complaints, act as a mediation and conciliation body or to investigate complaints of human rights violations, according to the laws by virtue of which they were created. The NCPs and NHRIs should be aware of their mutual mandates on the handling of complaints and examine the coordination of their activities."*

c. *"NHRIs and NCPs can, therefore, collaborate with each other to develop platforms that provide information, publications and tools on business and human rights issues for companies and other interested parties. Likewise, they can jointly organize public events to stimulate awareness and commitment among companies and communities regarding sustainability. "*

It is of great interest to note that the Danish Institute for Human Rights (DIHR) is the national human rights institution of Denmark, and in 2011, during the appearance of Denmark in the First Cycle of the Universal Periodic Review (UPR) before the UN Human Rights Council, recommended that his country review the agreements concerning the NCPs and *"ensure that the Danish NCP met all the main criteria of the NCPs in accordance with the OECD Guidelines, and all the criteria of the non-judicial complaints mechanisms according to the Proposed Draft of the Guiding Principles on Business and Human Rights of the UN "*.

That, in turn, the Recommendation of the OECD Council on Public Integrity, asks member and non-member countries to enable effective accountability; and in point 12, expressly indicates that the role of external supervision and control in the integrity system of the public sector should be reinforced, specifically: *"a) facilitating organizational learning and guaranteeing the rendering of accounts of the entities of the sector public by providing appropriate responses (including by applying corrective measures, where appropriate) to sanctions, decisions and formal advice from supervisory bodies (such as senior audit bodies, the ombudsman or information commissions), regulatory bodies and application and administrative courts."*

That, the Plan was structured around 3 main categories: *"increase participation in the OECD Committees; adhere to key instruments of the organization; carry out public policy studies."*

That, in the present, Argentina participates in different organs of the OECD, with a different degree of institutionality, such as: the Fiscal Affairs Committee, the Trade Committee, the Committee on Agriculture, the Committee on Fisheries, the Policy Committee in Science and Technology, the Development Center, the Working Group on Bribery, the Investment Committee, among others.

That Argentina currently awaits the formal invitation of the OECD, honoring the commitments assumed and committed for the coming years, in order to achieve the final approval of its entry by the 35 countries that are currently members of the OECD.

That recently the National Executive Branch presented the so-called First National Plan of Action on Human Rights (2017-2020), and its axis No. 5 "Civic Culture and Commitment to Human Rights", more precisely in point 5.6. "Human Rights and Businesses", states that the Ministry of Justice and Human Rights will contribute *"to the design and implementation ... of guidelines and protocols of action within the framework of international instruments such as the Guiding Principles of Business and Human Rights and the Guidelines of the OECD, with special attention to groups in situations of vulnerability."*, with the goal of preparing and implementing five (5) protocols and guidelines for action.

That, therefore, the **"OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development"**, will aim to: **a.** Establish a cooperation program to promote greater understanding, visibility and use of the OECD Guidelines between the Argentine National Contact Point and the Paris Principles Mandate that governs our NHRI, in pursuit of greater respect for human rights; **b.** Promote and protect human rights closely linked to the OECD Guidelines, through instruments and work on relevant initiatives, communications and publications; and **c.** Cooperate with other NHRIs in the coordination of good working practices, exchanging experiences, information, preparing proposals, and supporting the implementation processes of the OECD Guidelines.

That the general direction and supervision of the *Program* will be the responsibility of the Deputy Secretary General; and, the link, regarding the monitoring and evaluation with the different thematic areas of the Institution, is in charge of the Legal and Technical Advice Area, feeding this Program with the information that it collects from the other Programs that have been indicated above.

That said *Program* was implemented within the framework of action No. 13.330/17, and that it is included here to provide all the necessary data for the pertinent opportunity, and the necessary background information for the national authorities and the corresponding international organizations.

That the Communication Area will be in charge of developing the dissemination and promotion activities of the "*OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development*".

That the Legal and Technical Area has expressed its appropriate legal opinion;

That this Resolution is adopted in compliance with section 6, paragraph j) of the Regulations for the Organization and Functioning of the Ombudsman Office, the authorization given by the two Presidents of the largest political parties represented in Parliament, and, in addition, ratified by Res. N° 001/2014 of the Ombudsman Permanent Bicameral Commission, , dated 23 April 2014, and the President's note of the Ombudsman Permanent Bicameral Commission, dated 25 August 2015, which conferred the same powers granted to the Secretary General in the person of the Deputy Secretary General, in case the Secretary General be on leave or absent.

NOW, THEREFORE, as Deputy Secretary General of the Ombudsman Office, it is hereby ordered as follows:

ARTICLE 1.- Create the "*OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development*".

ARTICLE 2.- Approve the following work methodology within the framework of the aforementioned Program:

1. The overall direction and supervision of the Program is the responsibility of the Deputy Secretary General.

2. The purpose of the *Program* is: **a.** Establish a cooperation program to promote greater understanding, visibility and use of the OECD Guidelines between the Argentine National Contact Point and the Paris Principles Mandate that governs our NHRI, in pursuit of greater respect for human rights; **b.** Promote and protect human rights closely linked to the OECD Guidelines, through instruments and work on relevant initiatives, communications and publications; and **c.** Cooperate with other NHRIs in the coordination of good working practices, exchanging experiences, information, preparing proposals, and supporting the implementation processes of the OECD Guidelines.

3. The link, in terms of monitoring and evaluation with the different thematic areas of the Institution, and the relationship with the NHRIs, is in charge of the Legal and Technical Area, with the active participation of the Office of Jurisprudence and Documentation, nurturing this Program, among others, with the information it collects from the other Programs that have been referred to above.

4. That the *Program* will be carried out in the framework of action No. 13.330/17, and there will be added all the necessary information for the relevant opportunity, and the results will be reported to the national public authorities and international organizations which correspond.

5. That the Communication Area will be in charge of developing the dissemination and promotion activities of the "OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development".

ARTICLE 3.- To urge all public authorities of our country, national, provincial and municipal, to collaborate with the Office of the Ombudsman of the Nation, in its capacity as a National Human Rights Institution, with the requirements formulated in the framework of the "*OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development*", based on the principles recognized by the Alliance for Open Government and good governance practices.

ARTICLE 4.- Invite civil society as a whole, to participate, cooperate and collaborate directly with the development of the "OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development".

ARTICLE 5.- To put the contents of this resolution in the knowledge of the Ministry of Foreign Affairs and Worship of the Nation, of the Ministry of Finance of the Nation, of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), of the Program of the Nations United for Development (UNDP), in this case through its offices located in the Autonomous City of Buenos Aires, GANHRI, ECLAC, and the Permanent Bicameral Commission of the Ombudsman's Office.

ARTICLE 6.- Be duly notified, recorded and filed.

Unit for Policy Coherence with Sustainable Development



BUENOS AIRES,

HAVING REGARD TO the decisions A/HRX/17/31, A/HRC/RES/17/4, A/HRC/RES/33/L.17Rev. 1, of the United Nations, and Res. No. 1992754, reaffirmed by the General Assembly by Res. No. 48/134 of 1993. as well as The Edinburgh Declaration, approved on October 10, 2010, in the 10th International Conference, by the International Coordinating Committee of the National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, and the A/HRC/RES/17/4, of the UN Human Rights Council, among many others;

WHEREAS,

That this Institution created on December 30, 2015 the **"Monitoring and Evaluation Program of the Sustainable Development Goals. 2030 Agenda "**, in order to collaborate with the United Nations and with the public authorities of our country to achieve compliance with the 169 goals of that Agenda, by the National State.

That, the purpose of the Program is to carry out, periodically, a follow-up and evaluation of the national public policies that are carried out before 2030, collaborating with the preparation of annual reports.

That, it is important to emphasize that the Ombudsman of the Nation, in the month of July of 2017, participated, between days 10 to 19, of the United Nations High Level Political Forum, in New York, and was present when Argentina, represented by Dr. Gabriela Agosto, Executive Secretary of the National Council for the Coordination of Social Policies, presented its voluntary progress report, within the framework of the review and examination process on the implementation and application of the 2030 Agenda, as it arises of RES No. A / 70 / L.60.

That, our NHRI also presented its progress report on the "Monitoring and Evaluation Program for the Sustainable Development Goals. Agenda 2030", to the National Council for the Coordination of Social Policies, the United Nations System, the Permanent Mission of the Argentine Republic to the United Nations, represented by Ambassador Martín García Moritán, and to the UNDP.

That the Report, corresponding to January/June 2017, was updated at the end of the year for the July/December 2017 period, and handed over to those same authorities, as well as to other national and international organizations.

That the first report analyzed the degree of progress in public policies reached by the following 23 goals: 1.2., 1.3., 2.4., 3.7., 4.2., 5.2., 5.c., 6.1., 6.3. , 7.1., 7.2., 8.6., 9.c., 10.7., 11.5., 12.5., 13.2., 14.1., 14.2., 15.2., 16.9., 16.10., And 17.17; and in the second report, it was asked about 27 goals, most of them different from the previous ones: 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, 4.1, 4.5, 5.c, 6.1. 6.3, 7.1, 7.2, 8.7, 8.8, 9.c., 10.7, 11.1, 11.2, 12.5, 13.2, 14.1, 14.2, 15.1, 15.3, 16.2. 16.10., 17.17.

That both Reports indicate successes and shortcomings, and final proposals and recommendations are prepared so that, where appropriate, they are taken by the National State as a contribution to a better and more effective way of complying with the 2030 Agenda.

That, it is of the case to emphasize that both Reports will be delivered to the Global Alliance of National Institutions of Human Rights (GANHRI), in the 2018 annual meeting that will be held from February 21 to 23, 2018 in Geneva, Switzerland, in the Room XIX, in the Palais des Nations (UN).

That in order to GANHRI in its June 2017 publication, entitled "National Human Rights Institutions engaging with the Sustainable Development Goals (SDGs)", on page 19, it reads as follows: "A leader in the monitoring of human rights of the SDGs is the Argentine INDH, the National Ombudsman , which has played a crucial role in Argentina's national program for the monitoring and evaluation of the SDGs. ".

That, it adds: "In the month of January 2016, the National Institution of Human Rights of Argentina, the National Ombudsman (status A), launched a comprehensive program of monitoring and evaluation of the SDGs. The program was articulated in such a way that each of the thematic areas of the Ombudsman's Office would carry out investigations in accordance with its technical knowledge. By June 2017, the Ombudsman's Office had already opened fifty-seven investigations, all clearly linked to the SDGs. The results will be sent annually to the relevant national authorities

and to the United Nations System; in particular, to the Human Rights Council. In addition, the Ombudsman has mapped the recommendations of the Universal Periodic Review and the SDGs... The practice of the Ombudsman is not only an example of NHRI that, in the exercise of its mandate, supervises the aspects of the SDG related to human rights; it is also an excellent example of the exceptional role of bridging that NHRIs have: the Ombudsman's Office collaborates with civil society, universities, businesses and government agencies in an effort to promote and protect human rights within the framework of the SDGs in order to achieve the effective implementation of the Monitoring and Evaluation Program of the SDGs. The Ombudsman's Office has collaborated, specifically, with UNDP Argentina in the organization of four meetings with civil society actors in different provinces of Argentina. The meetings focused on commitment to the 2030 Agenda and the UPR. As the Ombudsman's Office itself highlights, the collaboration between the different stakeholders constitutes a significant contribution to Goal 17.17 of the SDGs that encourages the promotion of effective partnerships between the public, public-private and civil society sectors. The Ombudsman's Office, in addition to the work it carries out at the national level related to the SDGs, is a member of the GANHRI Working Group on SDG. ".

That, in turn, on March 28, 2017, the "GANHRI Program Working Group of the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals" was created (Global Alliance of National Human Rights Institutions), whose purpose is to coordinate good working practices with NHRIs of the American region, exchange experiences, prepare proposals, and support development for the progress of peaceful, just and inclusive societies, according to Goal 16; and exchange information, projects, documents, statements, publications, etc., with the other members of the GANHRI Working Group, based on the 2030 Agenda, with a view to strengthening the participation of NHRIs in the United Nations System.

That the "Programme on Business and Human Rights" was created on February 3, 2017, in order to identify, exchange, promote and evaluate good practices on the application of the Guiding Principles, and, where

appropriate, formulate recommendations or exhortations to the National State and to national and transnational companies.

That on December 20, 2017 the "OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development" was created, with the purpose of: **a.** Establish a cooperation program to promote greater understanding, visibility and use of the OECD Guidelines between the Argentine National Contact Point and the Paris Principles Mandate that governs our NHRI, in pursuit of greater respect for human rights; **b.** Promote and protect human rights closely linked to the OECD Guidelines, through instruments and work on relevant initiatives, communications and publications; and **c.** Cooperate with other NHRIs in the coordination of good working practices, exchanging experiences, information, preparing proposals, and supporting the implementation processes of the OECD Guidelines.

That, it should be remembered that Argentina adhered to the Declaration on International Investments and Multinational Enterprises of the OECD in 1997, which is why our country is a signatory to the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, which are part of that instrument.

That the OECD Guidelines for Multinational Enterprises (LDEM) are recommendations addressed by governments to multinational companies that operate in acceding countries or that have their headquarters in them, and that although they are not binding, constitute the only code of conduct responsible, comprehensive and multilaterally agreed, that governments have committed to promote.

That on May 4, 2010, the governments of the acceding countries of the Declaration on International Investment and Multinational Enterprises began to negotiate the updating of the Guidelines for Multinational Enterprises of the OECD; and as a result of this process, it was agreed to incorporate new subjects, ordered in successive chapters, which correspond to human rights, employment and labor relations, gender equality, education, environment, fight against corruption, consumer interests, science and technology, competition, taxation and publication of information.

That for the fulfillment of its objectives, the governments committed to establish National Contact Points (NCP) with the mission of promoting

the Guidelines and acting as a discussion forum for all matters related to them, also carrying out promotional activities, attending consultations and contributing to the resolution of issues that arise in relation to the implementation of the Guidelines in specific instances.

That, in this framework, by Resolution No. 17 dated January 25, 2013, the Ministry of Foreign Affairs and Worship established as functions of the National Contact Point "to promote the validity of the Organization's Guidelines for Cooperation and Economic Development (OECD) for Multinational Companies and contribute to the resolution of matters related to their implementation. "

That, besides the foregoing, and as background, it is of the case to highlight that in 2012, the OECD and the CIC (reiterated, now GANHRI) signed a Memorandum of Understanding in Amman, Jordan, within the framework of the XI Biennial Conference of the CIC.

That the purpose of the Memorandum of Understanding was to establish a cooperation program to promote understanding, visibility and use of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises along with the Mandate of the Paris Principles of NHRIs, in favor of a greater respect for human rights in the field of business activities.

That the Memorandum provided: *"This includes the use of synergies between the OECD and the NCPs, on the one hand, and the CIC and the NHRIs, on the other, for example, through: reference to instruments, functions and the relevant work mutual; joint participation in events of global relationship; the exchange of experiences and capacity building between NCPs and NHRIs; specialized knowledge on human rights and due diligence and continuous dialogue."*

That, in turn, the Recommendation of the OECD Council on Public Integrity, asks member and non-member countries to enable effective accountability; and in point 12, expressly indicates that the role of external supervision and control in the integrity system of the public sector should be reinforced, specifically: *"a) facilitating organizational learning and guaranteeing the rendering of accounts of the entities of the sector public by providing appropriate responses (including by applying corrective measures, where appropriate) to sanctions, decisions and formal advice*

from supervisory bodies (such as senior audit bodies, the ombudsman or information commissions), regulatory bodies and application and administrative courts."

That, the Plan was structured around 3 main categories: *"increase participation in the OECD Committees; adhere to key instruments of the organization; carry out public policy studies."*

That, in the present, Argentina participates in different organs of the OECD, with a different degree of institutionality, such as: the Fiscal Affairs Committee, the Trade Committee, the Committee on Agriculture, the Committee on Fisheries, the Policy Committee in Science and Technology, the Development Center, the Working Group on Bribery, the Investment Committee, among others.

That Argentina currently awaits the formal invitation of the OECD, honoring the commitments assumed and committed for the coming years, in order to achieve the final approval of its entry by the 35 countries that are currently members of the OECD.

That recently the National Executive Branch presented the so-called First National Plan of Action on Human Rights (2017-2020), and its axis No. 5 "Civic Culture and Commitment to Human Rights", more precisely in point 5.6. "Human Rights and Businesses", states that the Ministry of Justice and Human Rights will contribute *"to the design and implementation ... of guidelines and protocols of action within the framework of international instruments such as the Guiding Principles of Business and Human Rights and the Guidelines of the OECD, with special attention to groups in situations of vulnerability."*, with the goal of preparing and implementing five (5) protocols and guidelines for action.

That, it is not idle to mention that in exercise of the own competences of this Ombudsman, according to the effective laws, the mission imposed by the article 86 of the National Constitution and by virtue of the mandate that is recognized him according to the "Principles of Paris" adopted by the Commission of Human Rights by Res. No. 1992/54 reaffirmed by the General Assembly by Res. No. 48/134 of 1993, our Institution, as NHRI, participates in its own right throughout the system of promotion and protection of rights and freedoms fundamental universally

recognized in the International Bill of Human Rights and other international treaties and conventions.

That, in order to comply with all these commitments, our NHRI created, among others, as it was seen above, the "Monitoring and Evaluation Program of the Sustainable Development Goals. 2030 Agenda", and the "OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development", and the implementation of both and their practices allowed the establishment of a strategic framework for the monitoring and evaluation of public policies, for the benefit of all persons that inhabit our country.

That, within this context, the association "Policy Coherence for Sustainability Development" (PCSD) should be included, in Spanish: Coherencia de las Políticas para el Desarrollo Sostenible; that integrate governments, international organizations, civil society, the private sector, groups of experts and other committed stakeholders working to improve policy coherence for sustainable development, based on the 2030 Agenda, Goal 17 , goal 17.14: "Improve the coherence of policies for sustainable development." (UN, A / RES / 70/1)

That the PCSD, which depends on the OECD, is working to strengthen the capacities of governments and key stakeholders in the formulation, implementation and monitoring of the coherence of policies for sustainable development; as well as in the identification of good institutional practices to improve national strategies for sustainable development.

That, in addition, the PCSD, as indicated in the document entitled "PCSD PARTNERSHIP" (see website: <http://bit.ly/2EEawtc>) is committed to organizing workshops to promote dialogue on the coherence of policies for in the implementation of the SDGs; develop an online coherence monitor to provide options and support efforts to report on progress in SDG; develop national case studies to identify good practices and facilitate the exchange of experiences; establish a methodology to monitor Goal 17.14 of the 2030 Agenda; make practical guidelines to support any government interested in adapting its institutional mechanisms, policy formulation processes and practices to implement the SDGs in a coherent manner; and, finally, among others, is also committed to developing policy reports

on specific issues of coherence in the implementation of the SDGs to contribute to the dialogue on strategies; and publish annual reports with a thematic focus, aimed at stakeholders, partners and the United Nations High Level Political Forum.

That, finally, it should be emphasized that the PCSD invites its members to improve the coherence of public policies for sustainable development; to indicate the interested organizations if they are working on the coherence of the policies in the context of the implementation of the SDGs, as well as, where appropriate, to inform of the commitment assumed, the institutional practices carried out, their progress status, and inviting its publication through the Partnership PCSD online platform.

That, as is easy to see, the approach provided by the PCSD, I reiterate, depends on the OECD, regarding the coherence of public policies and their link with the Sustainable Development Goals, Agenda 2030, according to Objective 17, goal 17.14.

That, consequently and in order to directly and closely link the *Monitoring and Evaluation Program of the Sustainable Development Goals. 2030 Agenda*, and the *OECD Program - Organization for Economic Cooperation and Development*, it will be a good practice to create, within the scope of the National Ombudsman's Office, the *Functional Unit for Monitoring the Coherence of Public Policies for Sustainable Development*, whose direction and general supervision will be in charge of the Deputy Secretary General, and the link, in terms of monitoring and evaluation with the different thematic areas of the Institution, is in charge of Legal and Technical Area.

That the Functional Unit has as its purpose: **a.** Develop best practices within the framework of the Programs created by the Ombudsman's Office, to monitor the coherence of policies for sustainable development; as well as in the identification of good institutional practices to improve national strategies for sustainable development; **b.** Cooperate with the thematic areas of our Institution in the formulation of the Reports on the progress in the Sustainable Development Goals under a coherent perspective of public policies, and that will be presented annually to the authorities of our country, the United Nations System, and other national

and international organizations; **c.** Actively participate in the PCSD Collaborative Platform, disseminating the work done, sharing good practices and sharing knowledge.

That the Communication Area will be in charge of the task of dissemination and promotion of the activities developed by the *Functional Unit*, as well as the dissemination of its results.

That the Legal and Technical Area has expressed its appropriate legal opinion;

That this Resolution is adopted in compliance with section 6, paragraph j) of the Regulations for the Organization and Functioning of the Ombudsman Office, the authorization given by the two Presidents of the largest political parties represented in Parliament, and, in addition, ratified by Res. N° 001/2014 of the Ombudsman Permanent Bicameral Commission, , dated 23 April 2014, and the President's note of the Ombudsman Permanent Bicameral Commission, dated 25 August 2015, which conferred the same powers granted to the Secretary General in the person of the Deputy Secretary General, in case the Secretary General be on leave or absent.

NOW, THEREFORE,

as Deputy Secretary General
of the Ombudsman Office, it is hereby ordered as follows:

ARTICLE 1.- Create the *Functional Unit of Monitoring in the Coherence of the Public Policies in favor of the Sustainable Development*.

ARTICLE 2.- Approve the following work methodology within the framework of the aforementioned *Unit*:

1. The general direction and supervision of the Functional Unit is the responsibility of the Deputy Secretary General, and the link, in terms of monitoring and evaluation with the different thematic areas of the Institution, is in charge of Legal and Technical Area.

2. That the Functional Unit has the purpose of: **a.** Develop best practices within the framework of the Programs created by the National Ombudsman's Office, to monitor the coherence of policies for sustainable development; as well as in the identification of good institutional practices to improve national strategies for sustainable development; **b.** Cooperate with the thematic areas of our Institution in the formulation of the Reports on the progress in the Sustainable Development Goals from a perspective in the coherence of public policies, and that will be presented annually to the authorities of our country, the System of Nations United, and other national and international organizations; **c.** Actively participate in the PCSD Collaborative Platform, disseminating the work done, sharing good practices and sharing knowledge.

3. That the Communication Area will be in charge of the task of dissemination and promotion of the activities developed by the Functional Unit, as well as the dissemination of its results.

ARTICLE 3.-To put the contents of this resolution in the knowledge of the Ministry of Foreign Affairs and Worship of the Nation, of the Ministry of Finance of the Nation, of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), of the Program of the Nations United for Development (UNDP), in this case through its offices located in the Autonomous City of Buenos Aires, GANHRI, ECLAC, and the Permanent Bicameral Commission of the Ombudsman's Office.

ARTICLE 4.- Be duly notified, recorded and filed.



SUIPACHA 365 - C1008AAG
CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES
REPÚBLICA ARGENTINA
0810-333-3762 / (011) 4819-1500
defensor@defensor.gov.ar
